

LA ECOLOGIA POLITICA DEL PLOMO

Escribe Eduardo Gudynas *

En las últimas semanas, el problema de contaminación por plomo en La Teja, en lugar de solucionarse, se agrava. El hecho no parece ser puntual, las reparticiones estatales avanzan lentamente y la preocupación vecinal por la salud aumenta. Somos testigos de niños contaminados, con un futuro hipotecado; y de reparticiones estatales que no logran alcanzar soluciones efectivas.

En La Teja ha fallado casi todo lo que podía fallar, y sólo la constancia de los vecinos ha permitido poner en evidencia este drama. Tanto las reparticiones ministeriales como el municipio han actuado tardíamente, y sus progresos son lentos. El gobierno central, que supuestamente debería velar por el bien público y defender los intereses generales, se ha mostrado lerdo. Otro tanto ha pasado con la Intendencia de Montevideo. Unos y otros sabían desde fines del año 2000 sobre esta situación, pero parece que fue necesaria la denuncia periodística para llegar a medidas concretas. Que esa inacción tenga lugar en el gobierno central, amparado en una coalición de gobierno de fuerte sesgo liberal, puede ser comprensible, en tanto aguardarían a que cada vecino actuara individualmente y como pueda. Pero lo más sorpresivo es que la Intendencia de Montevideo se mostrara igualmente lenta e ineficiente, ya que ese gobierno municipal responde a otros principios políticos, decididamente volcados a la defensa del bien común y la solidaridad. Por este tipo de razones, la IMM debía haber estado al frente de todas las acciones.

En un país desarrollado, una crisis como ésta seguramente terminaba a estas alturas en más de una renuncia, así como un llamado a sala del intendente y una interpelación ministerial. No piense que es exagerado: estamos hablando de altos niveles de contaminación con plomo, de origen desconocido, cubriendo un área de la ciudad que tampoco se conoce bien, y que seguramente es de larga data.

A pesar de todo esto, son pocos los que esperan que este drama tenga claras consecuencias políticas, ya que todas las corrientes políticas, la izquierda en el municipio como blancos y colorados en el gobierno central, no han actuado adecuadamente, y nadie cuestiona a los otros por miedo a las réplicas que dejarán en evidencia las propias fallas. Son este tipo de circunstancias las que alimentan el descrédito en la política.

Si la lenta marcha municipal es tan parecida a los entreveros burocráticos ministeriales, podemos preguntarnos ¿qué diferencia políticamente a un gobierno de izquierda en Montevideo? Debemos admitir que en este caso será difícil encontrar esa distinción, ya que queda en claro un problema más profundo: la debilidad municipal en construir una política ambiental progresista.

El control de la calidad ambiental es un aspecto central de una política ambiental, y en especial desde una perspectiva progresista, en tanto defiende no solamente al ambiente sino a la calidad de vida y salud de las personas. Tampoco puede olvidarse que este tipo de contaminaciones genera un alto costo económico, por factores como la atención médica, caída del valor inmobiliario en el área (¿quién compraría una casa en un barrio contaminado por plomo?), inversiones en descontaminación, y así sucesivamente. Puede predecirse que los costos humanos y económicos de este hecho serán muy altos. Mucho se hubiera ahorrado si los sistemas de monitoreo y control ambiental operaran adecuadamente. No puede pasar desapercibido que la contaminación por plomo es de larga data, y no un mero accidente puntual, de donde esa falta de control se arrastra probablemente desde hace años.

Esta situación debe dejar en claro que una política progresista pone en primer plano al cuidado de ambiente y la salud de la gente, y que ello exige de correctos sistemas de monitoreo sobre todas y cada una de las empresas y particulares, sean privadas o estatales. La exigencia de esos monitoreos, y en especial su fiscalización, es una tarea ineludible de la IMM, y no puede ser delegada a las empresas para que se controlen a sí mismas (lo que implica, por ejemplo, la necesidad de la fiscalización externa e independiente sobre emisión de contaminantes en Ancap). Una política de este tipo es a la vez económicamente vigorosa, en tanto evita una ventaja desleal de los contaminadores por la transferencia de costos económicos hacia los sectores más pobres (que es justamente lo que sucedió en La Teja, donde alguien consiguió una ventaja económica en un proceso productivo sin cuidados ambientales, dejando esa carga a los vecinos).

Pero una política ambiental progresista también es abierta y participativa. Los informes sobre contaminación deben ser obligatorios y públicos, por lo tanto accesibles para cualquier vecino. Sorpresivamente, la IMM insiste con una política de mantener en reserva ese tipo de información, una posición que la deja incluso por detrás del BID, quien es el que obliga a publicar en la prensa el estado de contaminación de los arroyos capitalinos. Esta falta de difusión de la información, y las trabas reales que encuentran los vecinos en sus denuncias ambientales, parece sugerir que tanto los técnicos municipales como ministeriales le tienen miedo a la participación ciudadana.

El caso de la contaminación de La Teja todavía no ha finalizado. Pero ya deja varias lecciones sobre la necesidad de crear una política ambiental municipal más vigorosa y efectiva, donde la contaminación no se combate con citas ni deseos, sino llevando a la práctica los compromisos de solidaridad y bien común.

** Investigador del Centro Latino - Americano de Ecología Social (CLAES)*

La República, 18 de Marzo 2001, pag. 11.